



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

D. E. I. y P. de Barranquilla, veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).

| | |
|---------------------------|--|
| Radicado | 08-001-33-33-006-2018-00356-00 |
| Medio de control o Acción | Incidente de Desacato |
| Tutelantes | Ronald José Valdés Padilla e Idalmy Minotta Terán |
| Tutelados | Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas |
| Jueza | Lilia Yaneth Álvarez Quiroz |

I.CONSIDERACIONES

Visto el informe secretarial que antecede, tenemos que, mediante escrito radicado al correo electrónico del despacho, el señor Ronald José Valdés Padilla solicita a esta Agencia Judicial imparta trámite incidental de desacato por el incumplimiento de las órdenes impartidas por el Despacho en el fallo de tutela emitido el día 04 de diciembre de 2018.

La sentencia Dispuso en sus numerales segundo y tercero lo siguiente:

"SEGUNDO: TUTELAR el derecho fundamental a la consulta previa invocado por los señores RONALD JOSÉ VALDÉS PADILLA e IDALMY MINOTTA TERAN en su condición de Delegados ante el Espacio Nacional de Consulta Previa, ello de acuerdo con la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: ORDENAR a la UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS suspender de la aplicación de la Resolución 04136 de agosto 27 de 2018, hasta tanto se verifique el agotamiento del procedimiento de consulta previa con la participación del Espacio Nacional de Consulta Previa, la cual deberá efectuarse en un periodo máximo de treinta (30) días hábiles y ajustarse a las once pautas fijadas en la Sentencia T-129 del 2011, la cuales se relacionaron en la parte motiva de esta providencia".

A su vez, el Tribunal Administrativo del Atlántico — Sección C Mixta, resolvió impugnación interpuesta por la parte accionada mediante providencia de enero 30 de 2019, comunicada a este Despacho el 27 de febrero de 2019. La citada providencia dispuso en sus dos primeros numerales lo siguiente:

"PRIMERO: MODIFICAR el ordinal tercero de la sentencia proferida el 04 de diciembre de 2018 por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla, que quedará así:

'(...) TERCERO: OREDENAR a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas inaplicar por inconstitucionalidad la Resolución 04136 de agosto 27 de 2018, hasta tanto se realice el procedimiento de consulta previa con la participación del Espacio Nacional de Consulta Previa, el cual deberá efectuarse dentro de un periodo máximo de treinta (30) días hábiles siguientes a la notificación de esta sentencia, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el Decreto 1372 de 2018 y en la parte motiva de esta providencia'

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia del cuatro (04) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), proferida por el Juzgado Sexto Administrativo Oral, de conformidad con las razones precedentes".

Adelantando el requerimiento previo a la apertura del trámite incidental mediante auto de fecha 21 de septiembre de 2021, se ordenó requerir al encargado de dar cumplimiento al fallo de tutela de fecha 04 de diciembre de 2018, Director de la Unidad Administrativa Especial Para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, o a quien haga sus veces al momento de la notificación dé esta providencia, otorgando un término de 48 horas para que rindiera el respectivo informe.

La Unidad de Atención Y Reparación Integral de Víctimas se pronunció de la siguiente manera:

Imposibilidad para cumplimiento del fallo por parte de los accionantes

Su señoría, los accionantes determinaron excluir de la etapa de pre consulta a la Comisión Redactora, para elaborar la ruta metodológica, lo cual impide que la Unidad para las Víctimas cumpla en fallo en los términos establecidos, en la medida que el numeral 5 es muy claro es señalar, que en el proceso de consulta previa deben participar "en el proceso de consulta previa ordenado en la presente providencia de las Comunidades Negras- Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras miembros de la Mesa Nacional de Víctimas y participantes de la Comisión Redactora de la Resolución 04136 de agosto 27 de 2018."

(...)

Su señoría, de la anterior norma citada es claro que en proceso de consulta previa se encuentra la etapa de Pre- Consulta la cual consiste en la construcción de la ruta metodológica, las actividades, costos técnicos, operativos, logísticos y los cronogramas de los procesos de consulta previa. Es decir, que, si la orden del fallo de tutela del 4 de diciembre de 2018 dispuso incluir en el proceso de consulta previa a los miembros de la Comisión Redactora en representación de las víctimas afro, implica que su participación es desde la primera etapa y no desde etapas posteriores, por lo cual su presencia es fundamental.

Es importante señalar su señoría, que la Unidad para las Víctimas en cumplimiento del fallo de tutela y de acuerdo con el oficio que se radicó en el despacho el 5 de diciembre de 2019, reconoció la necesidad de involucrar a la Comisión Redactora por lo que se garantizó la presencia de sus miembros los días, 5, 6, 7 y 8 de Diciembre de 2019 de acuerdo con la agenda propuesta, sin embargo los miembros del Espacio Nacional de Consulta Previa Afro les manifestaron que no se le iba permitir el ingreso por cuanto es un espacio autónomo, el cual se rige por lo dispuesto en el Decreto 1372 de 2018, y que el mismo, no señala que dentro del proceso de consulta previa puedan participar con poder de decisión personas ajenas al Espacio Nacional de Consulta Previa Afro.

Sobre el particular el Acta del 9 de diciembre de 2019 de la Comisión Sexta del Espacio Nacional de Consulta Previa señala:

"Por otra parte, mencionan que el Juez se refiere a la intervención de la Comisión Redactora en el proceso, pero no especifica que deba hacer parte del proceso

desde el principio del mismo, pues esto desconocería que las partes competentes para adelantar la etapa de pre consulta son la UARIV y la Comisión IV del ENCP.”

De acuerdo con el acta de la sesión del 9 de diciembre de 2019, los delegados de la Comisión VI del ENCP presentaron la propuesta de ruta de trabajo de la iniciativa “Propuesta de Protocolo de Participación Efectiva de las Víctimas pertenecientes a Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, en el marco del conflicto armado” en el siguiente sentido:

(...) La comisión VI, no acoge la propuesta de la UARIV, en el sentido de suspender la sesión dado que:

1. De conformidad con el artículo 2.5.1.4.5 el numeral 1. la etapa de Pre consulta es para: “Concretar la ruta metodológica, las actividades, costos técnicos, operativos, logísticos, y los cronogramas de los procesos de consulta previa”. De tal forma que el argumento presentado por el representante jurídico de la mencionada entidad por la no presencia de los miembros de la mesa nacional de víctimas y participantes de la comisión redactora, en la etapa de pre consulta, no es procedente.

2. En observancia de lo dispuesto en el decreto 1372 de 2018 y especialmente, lo señalado en el numeral 2 del artículo 2.5.1.4.5. que establece: “En esta etapa se abordará el estudio del proyecto de medidas legislativas o administrativas de carácter general, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas, en el marco del convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia constitucional”, la orden contemplada en el numeral 5 de la sentencia proferida por el Juez Sexto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, de vincularlas en el proceso de Consulta Previa se cumple es en la segunda fase.

Por las razones expuestas, los delegados consideraron que existían las condiciones para continuar con la sesión y presentaron una propuesta de Ruta Metodológica. (...)

De acuerdo con lo anterior, su señoría el mismo Accionante que es el Señor Ronald Valdés como Presidente de la Comisión Sexta, manifestó no aceptar el cumplimiento del fallo en los términos del numeral quinto y solicitó que se adelantara la construcción de la ruta metodológica, sin la participación de la Comisión Redactora en representación de las víctimas afro, por lo cual se configura un impedimento fáctico, en la medida que es externo ajeno a la Unidad para las Víctimas cumplir con la orden del fallo en los términos del mismo.

Por su parte La Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, mencionó que es su responsabilidad coordinar y dar las claridades necesarias para impulsar el proceso de consulta previa y garantizar los derechos de las comunidades, los cuales específicamente en este proceso involucran la protección de la población víctima.

Señala, que la Corte Constitucional en la sentencia C-615 de 2009 se pronunció en aras de brindar claridades sobre la pre consulta, señalando que para “abordar un proceso de consulta previa es necesario planificarlo, lo que significa que antes de iniciar el proceso las partes se deben reunir a definir una ruta metodológica, tal

y como consta en el decreto 1372 de 2018”. Es en la ruta metodológica en la que se debe definir conjuntamente cómo involucrar a otros participantes, en este caso, en cumplimiento del fallo de tutela que convoca involucrar en este proceso, a la Comisión Redactora.

Y señaló que, una vez escuchados los argumentos de las partes, y entendiendo que la etapa de preconsulta y consulta deben ser llevados con las partes y teniendo en cuenta que la UARIV solicitó suspender el proceso, y teniendo en cuenta que no se puede llevar el proceso con una sola parte, no queda más que suspender la sesión.

“Como coordinadores y competentes para velar por los derechos de las comunidades en los procesos de consulta previa, se manifiesta que es imposible continuar con el proceso de preconsulta cuando ambas partes tienen posiciones contrarias, por lo tanto, no puede la Dirección obligar a una de las partes que ha manifestado no querer continuar de acuerdo con los argumentos que consideran para ellos válidos, por tanto, se hace necesario cerrar la sesión.”

En este sentido, se dio por suspendida la sesión, en la medida que los accionantes y miembros de la comisión sexta manifestaron no compartir la interpretación de la orden Quinta del fallo de tutela, en la medida que, en su entender, la comisión redactora no debe participar en la etapa de construcción de la ruta metodológica sino en la etapa de consulta previa, lo cual para la Unidad es contrario al fallo y a la norma que regula la materia.

Solicitud Respetuosa

- *Se ordene el acompañamiento del despacho en una mesa de trabajo para la concertación de un Plan de Trabajo que nos permita de forma transparente realizar el proceso de consulta previa, sin beneficiar intereses personales y se concrete la protección del derecho fundamental a la participación de las comunidades afro y víctimas del conflicto armado en la construcción del protocolo de participación.*
- *Abstenerse de abrir un incidente de desacato en la medida que se cumplió con la orden del fallo de tutela del 4 diciembre de 2018.*
- *Declarar que la Unidad para las Víctimas no se encuentra en desacato de la orden del fallo de tutela y los accionantes en su doble calidad de accionantes miembros de la Comisión Sexta del Espacio Nacional de Consulta Previa Afro regulado por del Decreto 1372 de 2018, impidieron su cumplimiento por considerar que no pueden participar el proceso de consulta previa “las Comunidades Negras-Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras miembros de la Mesa Nacional de Víctimas y participantes de la Comisión Redactora de la Resolución 04136 de agosto 27 de 2018”*
- *Se acepten las actividades que se abordaron desde el año 2014 al 2018, en la construcción del protocolo de manera participativa, sean tenidas en cuenta en este proceso consultivo.*

De conformidad a lo anterior, mediante auto de fecha once (11) de octubre de 2021, se ordenó la apertura del incidente de desacato y se solicitó a la UARIV, rendir el informe correspondiente a lo que la entidad realizó la siguiente petición:

- 1- *La vinculación al incidente de desacato a la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior y a la Comisión Redactora del espacio Nacional de Víctimas.*
- 2- *Oficiar a la Comisión Redactora de la Resolución 04136 de agosto de 2018, con el fin de establecer la veracidad de los hechos expuestos por los accionantes.*

Respecto a la solicitud elevada por la entidad accionada, mediante auto de fecha diez (10) de noviembre de 2021, se ordenó:

PRIMERO: REQUIÉRASE a la DIRECCION DE ASUNTOS PARA LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, y a la COMISIÓN REDACTORA DE LA RESOLUCIÓN 04136 DE AGOSTO DE 2018, para que rindan informe al despacho en los términos señalados en la parte considerativa de la presente providencia, informe que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas, contados a partir de la fecha en que reciba el correspondiente oficio.

SEGUNDO: REQUIERASE a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE VÍCTIMAS (UARIV), para que dentro del término de veinticuatro horas (24) suministre al Despacho los correos electrónicos para notificaciones de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior y de la Comisión Redactora del espacio Nacional de Víctimas.

Referente normativo

Respecto al cumplimiento de los fallos de tutela el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, prevé:

"Proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad responsable del agravio deberá cumplirlo sin demora. Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél. Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia.

Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal del funcionario en su caso. En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza."

De la lectura del artículo antes transcrito, se tiene que la finalidad del incidente de desacato es el cumplimiento de la orden impartida en la decisión de la tutela, esta es la esencia de la norma. El fin que se busca es el cumplimiento de la orden para hacer'

efectiva la protección del derecho tutelado, dejando en competencia del Juez el verificar el cumplimiento.

La Corte Constitucional en auto 018 de febrero 8 de 2013 precisó que:

"Es obligación y responsabilidad del juez constitucional hacer cumplir las sentencias de tutela. Lo anterior, según lo ha sostenido esta corporación, puede exigirse solicitándose su cumplimiento de la sentencia o proponiendo un incidente de desacato.

Según ha precisado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, por regla general, el juez de primera instancia "que haya conocido el trámite de tutela, es en todo caso el competente para conocer del trámite incidental por desacato. (...)

Y en lo que atañe al incidente de desacato, la Alta Corporación a su vez expresó:

"El fundamento legal del desacato está consagrado en los artículos 52 y 27 del Decreto 2591 de 1991, en virtud de los cuales se establece: "Artículo 52. Desacato. La persona que incumpliere una orden de un juez proferido con base en el presente Decreto, incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis (6) meses y multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales, salvo que en este Decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción. "

"Artículo 27. (...) El juez podrá sancionar por desacato al responsable ya! superior hasta que cumplan su sentencia (...)"

En particular, sobre las hipótesis en las cuales procede el desacato, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que hay lugar a solicitado cuando no ha sido cumplida la orden dictada en un fallo de tutela, Ti,] cuando el cumplimiento ha sido insuficiente o incompleto fila cuando no han sido obedecidas otras decisiones tomadas por el juez en el curso del proceso, fivl cuando no se obedece la orden judicial dada al demandado de no volver a incurrir en las conductas que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales, o cuando el demandado no cumple dentro de los términos señalados por la providencia judicial."

Así, una vez se logra verificar en el trámite del incidente de desacato que existe una omisión en el cumplimiento del fallo, la decisión del juez adquiere para quien incumple un carácter eminentemente coercitivo. Por esta razón, la normatividad ha previsto, respecto de dicha providencia, el grado jurisdiccional de la consulta ante el superior jerárquico del funcionario que adoptó la sanción. Diferente al grado de consulta, la normatividad no contempló ninguna otra posibilidad de procedencia de algún recurso (reposición o apelación) contra la decisión del juez constitucional de imponer sanciones al estar demostrada la existencia del desacato.

La Corte ha reconocido en reiterados pronunciamientos que la imposición de una sanción en el curso del incidente de desacato puede llevar a que el accionado se

persuada del cumplimiento de la orden de tutela. En tal sentido, en caso de que se empiece a tramitar un incidente de desacato y el accionado, reconociendo que se ha desatendido lo ordenado por el juez de tutela, quiera evitar la imposición de una sanción, deberá proceder a acatar la sentencia. De igual forma, en el supuesto en que se haya adelantado todo el procedimiento y se haya decidido sancionar al responsable, éste podrá evitar que se le imponga la multa o el arresto cumpliendo el fallo".

Caso Concreto:

En el presente asunto, la Unidad Para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, manifiesta la imposibilidad para el cumplimiento del fallo, toda vez que los accionantes determinaron excluir de la etapa de preconsulta a la Comisión Redactora, para elaborar la ruta metodológica, lo cual impide que se cumpla el fallo en los términos establecidos por el Juzgado, por lo cual se configura un impedimento factico externo a la UARIV.

Por su parte señalan que el proceso de consulta previa en la actualidad se encuentra en etapa de preconsulta, consistente en la construcción de la ruta metodológica, las actividades, costos técnicos, operativos, logísticos y los cronogramas de los procesos de consulta previa, sin embargo, al no aceptarse el cumplimiento del fallo en los términos de numeral 5°, es decir con la participación de la comisión redactora en representación de las víctimas afro, la UARIV solicitó suspender el proceso, teniendo en cuenta que no se puede llevar a cabo con una sola parte.

A su vez mediante documento adjunto del 06 de marzo de 2020, se convocó una reunión entre los accionantes, en representación de la Comisión Sexta, y los representantes de la Comisión Redactora, donde se mantuvo la posición de la propuesta de la Comisión Sexta, es decir no permitir la participación de la Comisión Redactora en la etapa de preconsulta, por lo cual manifiesta la UARIV que no están dadas las garantías para adelantar el proceso de consulta previa.

En consecuencia, no es de recibo para el Despacho el argumento expuesto por la parte accionada, a la imposibilidad de cumplir con lo ordenado en los fallos de primera y segunda instancia, esto es inaplicar por inconstitucionalidad la Resolución 04136 de agosto 27 de 2018 y llevar a cabo el procedimiento de consulta previa de dicha norma con la participación del Espacio Nacional de Consulta Previa, en un periodo máximo de treinta (30) días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia, máxime cuando el artículo 2.5.1.4.5 del Decreto 1372 de 2018 establece como primera etapa en el proceso de consulta previa la pre consulta, etapa dentro de la cual cerca de cumplirse dos años de haberse proferido el fallo no se ha avanzado en su desarrollo, y únicamente se intentado un solo acercamiento entre las partes el cual se llevó a cabo hace más de un año, a fin de establecer los parámetros, y acordar la participación de todos en la etapa de preconsulta.

En tal sentido, para el Despacho no se encuentran plenamente acreditadas, las gestiones e impulsos al proceso adelantados por parte de la UARIV, respecto al cumplimiento del fallo de tutela de fecha 04 de diciembre de 2018, modificado parcialmente mediante providencia de segunda instancia del 30 de enero de 2019, por otra parte no es posible aceptar como parte del cumplimiento del fallo las actividades adelantadas entre el 2014 y 2018, en la construcción del protocolo para el desarrollo del proceso consultivo, toda vez que precisamente partiendo de esos antecedentes se tomó la decisión de tutelar los derechos fundamentales conculcados.

En efecto de las órdenes impartidas a la UARIV, además de suspender la aplicación de la Resolución 04136 de agosto 27 de 2018, se encontraba vincular y garantizar la participación en el proceso de consulta previa a las comunidades negras raizales y palenqueras, sin embargo a pesar de los inconvenientes presentados, la UARIV solo acreditó haber intentado una reunión en fecha 06 de marzo de 2020, entre los accionantes, miembros de la comisión sexta y los representantes de víctimas de la comisión redactora, habiendo transcurrido un tiempo considerable sin que se desplegará gestión alguna para el desarrollo del cronograma propuesto.

En el mismo sentido, la UARIV desatendió los requerimientos realizados en auto de fecha 10 de noviembre de 2021, por medio del cual se oficia a la comisión redactora de la Resolución 04136 de agosto de 2018, y a la Dirección de asuntos para las comunidades Negras Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, quedando la carga probatoria de suministrar los correos electrónicos de las entidades señaladas dentro del término de 24 horas, notificar y obtener los informes correspondientes, por lo tanto no es posible verificar las afirmaciones realizadas por la UARIV.

En virtud de lo anterior, la entidad accionada no probó en debida forma, traduciéndose esto en desatención al llamado del Juzgado, sobre el cumplimiento de fallo de tutela

La Corte Constitucional en Sentencia T-171 de 2009 ha expresado lo siguiente:

*"El cumplimiento es de carácter principal pues tiene su origen en la Constitución y hace parte de la esencia misma de la acción de tutela, bastando una responsabilidad objetiva para su configuración- **por su parte, el desacato es una cuestión accesorio de origen legal y para que exista se requiere una responsabilidad de tipo subjetivo consistente en que el solo incumplimiento del fallo no da lugar a la imposición de la sanción, ya que es necesario que se pruebe la negligencia de la persona que debe cumplir la sentencia de tutela**", (Negrita y subrayado fuera del texto)*

En ese orden de ideas, lo anterior se entiende a que dicha desatención deviene en que se tengan por ciertos los hechos alegados en el incidente de desacato por la accionante, por lo cual esta judicatura considera que se ha dado un incumplimiento total del fallo de tutela.

Atendiendo el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 y a efectos de establecer la sanción a imponerse, se consideran como criterios de razonabilidad la necesidad de imponer la sanción y la proporcionalidad de la misma.

El primero de los criterios, se orienta a la adecuación a los fines perseguidos, sin exceder, su contenido, lo que fue el sentido original de la medida de protección descrita en el fallo incumplido que para el presente caso, corresponde, a la utilización de un medio que disuada a la accionada de mantener en retardo del cumplimiento de la sentencia de tutela.

El segundo criterio por su parte, obedece a la exigencia que sean acreditadas por los incidentados las gestiones administrativas encaminadas a garantizar y asegurar la protección del derecho fundamental a la reparación de víctimas amparado en el fallo de tutela.

Con el fin de establecer la razonabilidad de la sanción, encuentra el Juzgado que como el incumplimiento de la orden de la tutela para los efectos que se pretenden ha sido total, de conformidad a lo señalado en el Decreto 2591 de 1991:

ARTICULO 52. DESACATO. *La persona que incumpliére una orden de un juez proferido con base en el presente Decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales salvo que en este Decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.*

La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción.

En ese orden de ideas, se tendrá por probado el presente incidente, lo que conlleva a la imposición de las sanciones respectivas para los funcionarios, sin perjuicio que se insista en el cumplimiento de la decisión y se puedan adoptar otras decisiones encaminadas a disuadir la renuencia de los incidentados a cumplir con la medida de protección dispuesta en favor de los accionantes, como son aquellas de compulsión de copias a la Procuraduría General de la Nación, para que adopte los correctivos disciplinarios correspondientes.

De lo expuesto, es clara la concurrencia de los supuestos establecidos por la Jurisprudencia Constitucional, para que se torne procedente la sanción por desacato, pues, el incumplimiento de los sujetos pasivos de la orden judicial, dimana de un comportamiento negligente, al que poco o nada le importa justificar las razones de la omisión.

Atendiendo el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 y a efectos de establecer la sanción a imponerse, se consideran como criterios de razonabilidad — la necesidad de imponer la sanción- y la proporcionalidad.

El primero de los criterios, se orienta a la adecuación a los fines perseguidos, sin exceder, su contenido, lo que fue el sentido original de la medida de protección descrita en el fallo incumplido - que para el presente caso, corresponde, a la utilización de un medio que disuada a la accionada de mantener en retardo del cumplimiento de la sentencia de tutela.

El segundo criterio por su parte, obedece a la exigencia que sean acreditadas por los incidentados unas gestiones administrativas encaminadas al cumplimiento cabal del fallo, sin más dilaciones administrativas.

En el fin de establecer la razonabilidad de la sanción, encuentra el Juzgado que como el incumplimiento de la orden de la tutela ha sido total y ha persistido por un tiempo desbordado para acatar la orden del Juez Constitucional, sin adelantar ningún tipo de gestión encaminada a su cumplimiento, se considera que de esos dos aspectos, la multa y la orden de arresto resultante sea un tanto ejemplarizante, que sin llegar a la máxima sanción descrita por el art.52 del Decreto 2591 de 1991, al menos, sea lo suficientemente disuasiva para cada uno de los responsables de cumplir la decisión, por lo tanto es procedente entonces sancionar a los funcionarios responsables del cumplimiento del fallo, con dos (2) días de arresto y multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

No obstante de la sanción impuesta, se advierte a la parte sancionada, que deberá dar cumplimiento al fallo de tutela de manera inmediata, en los términos ordenados en el mismo.

Con fundamento en lo anterior, el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, administrando justicia en nombre de la Republica de Colombia

RESUELVE:

Primero: DECLARAR probado el presente incidente de desacato en contra de la **Unidad Administrativa Especial Para la Atención y Reparación de Víctimas**, presentado por los señores Ronald **José Valdés Padilla e Idalmy Minotta Terán**, en relación al fallo de tutela de fecha 04 de diciembre de 2018, modificado mediante providencia de enero 30 de 2019 del Tribunal Administrativo del Atlántico, atendiendo la parte considerativa de la presente providencia.

Segundo: En consecuencia, se decide imponer sanción a la **Directora de asuntos étnicos de la UARIV LUZ AMANDA PASUY MITICANOY**, identificada con cédula de ciudadanía N° **41182881**, o quien haga sus veces, por el incumplimiento del fallo de tutela del 04 de diciembre de 2018, consistente **en orden de arresto por dos (02) días**, y multa de **cinco (5) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes**, los cuales, de manera inmediata, deberán ser consignados a favor de la Rama Judicial — Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con destino al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia, en la Cuenta No. 3-820-000640-8 del Banco Agrario de C.S.J.- **MULTAS Y SUS RENDIMIENTOS**. CUN.

Tercero: OFICIESE al Ministerio de Defensa **POLICIA NACIONAL**, a fin que materialicen la orden de arresto impuesta contra **Directora de asuntos étnicos de la UARIV LUZ AMANDA PASUY MITICANOY**, identificada con cédula de ciudadanía N° **41182881**.

Cuarto: SE PREVIENE, a la **Directora de asuntos étnicos de la UARIV, LUZ AMANDA PASUY MITICANOY**, identificada con cédula de ciudadanía N° **41182881** que las anteriores sanciones fueron impuestas, sin perjuicio de exigírseles el cumplimiento inmediato de la resolutive del fallo de tutela de 04 de diciembre de 2018, modificado mediante providencia de enero 30 de 2019 del Tribunal Administrativo del Atlántico en el sentido que se debe garantizar y asegurar la protección de los derechos fundamentales de los accionantes.

Quinto: NOTIFIQUESE la presente providencia a la **Directora de asuntos étnicos de la UARIV, LUZ AMANDA PASUY MITICANOY**, identificada con cédula de ciudadanía N° **41182881**, través del medio más expedito del sancionado.

Sexto: NOTIFICAR la presente decisión al Director General de la **UARIV, RAMÓN ALBERTO RODRIGUEZ ANDRADE**, para que adelante las gestiones de carácter administrativo y disciplinario que correspondan contra la **Directora de asuntos étnicos de la UARIV, LUZ AMANDA PASUY MITICANOY**, por el incumplimiento del fallo de tutela del 04 de diciembre de 2018.

Séptimo: NOTIFÍQUESE esta decisión a la parte accionante en la dirección electrónica registrada en el escrito de incidente, conforme lo dispuesto en el Decreto Ley 2591 de 1991.

Octavo: Para todos los efectos legales, y en virtud del Estado de Emergencia Sanitaria producto del COVID-19, las providencias que se dicten en el trámite del presente

incidente de desacato, se notificarán a las partes por el medio tecnológico más expedito y eficaz dejando constancia de la misma. Los informes solicitados y sus anexos, deberán allegarse al correo electrónico adm06bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Noveno: Súrtase el grado de consulta de la presente decisión ante el Tribunal Administrativo del Atlántico.

Décimo: Líbrense los correspondientes oficios a las partes y al Defensor del Pueblo

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

**LILIA YANETH ÁLVAREZ QUIROZ
JUEZA**

L.P.V

Firmado Por:

Lilia Yaneth Alvarez Quiroz
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
Contencioso 006 Administrativa
Barranquilla - Atlantico

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 36a52b002d3fe55cb5b41fc9d936124f24a712efb6a0b8d8257e7676d956f23b

Documento generado en 25/11/2021 05:55:33 PM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>